

Plan Colombia

Noam Chomsky*

Resumen

Colombia recibe más ayuda militar de Estados Unidos que el resto de América Latina y el Caribe unidos, y esta situación puede profundizarse con la ejecución del Plan Colombia, fundamentado en la lucha antidrogas. Sin embargo, el país ha sido calificado con el récord en violación de derechos humanos.

En este contexto se aplica la reforma económica más significativa en la década de los noventa, generando condicionantes en los procesos de integración con sus vecinos. En concordancia con el secretario de Defensa, Henry Stimson, desde los años 60 Estados Unidos estaba autorizado para controlar su propio sistema regional, mientras todos los demás intentos serían desmantelados.

La presentación ambigua de esta política del gobierno estadounidense en Colombia es cómo disociar esta guerra contra la droga y la lucha irregular contrainsurgente. En Estados Unidos hay otra opinión que debe conocerse para comprender las divergencias en el interior de dicho país.

Este artículo del prestigioso profesor universitario del MIT, Noam Chomsky, es un referente obligado en términos de opinión pública y académica de dimensión internacional, por el inmenso respeto que infunde tanto en América como en Europa.

En 1999, Colombia se convirtió en el principal país receptor de ayuda militar y de asistencia policial de Estados Unidos, reemplazando a Turquía, puesto que Israel y Egipto pertenecen a diferente categoría. Colombia recibe más ayuda militar de Estados Unidos que el resto de América Latina y el Caribe juntos. El total para 1999, alcanzó aproximadamente US\$300 millones, además de US\$60 millones en ven-

ta de armas, un incremento tres veces mayor con relación a 1998.

Estas cifras podrán incrementarse todavía más debido a la presentación anticipada de una de las versiones del Plan Colombia del presidente Clinton al Congreso de Estados Unidos en abril de 2000, mediante el cual se solicitó un paquete de "ayuda de emergencia" por US\$1.600 millones por dos años.

En los años noventa Colombia fue, con bastante ventaja, la receptora más importante de ayuda militar de Estados Unidos en América Latina, y de igual manera ha sido clasificada con el peor récord en violación de los derechos humanos¹.

1. Arms Transfers. Adam Isacson y Joy Olson, *Just the Facts: A Citizen's Guide to U.S. Defense and Security Assistance to Latin America and the Caribbean*, Latin America Working Group and Center for International Policy, Washington DC, 1999. Para antecedentes y fuentes no citadas aquí véase Chomsky, *Detering Democracy*, Verso, 1991; Hill & Wang, 1992, capítulos 4 y 5; *World Orders Old and New*, Columbia,

* Ph.D., Profesor Universitario, Departamento de Lingüística y Filosofía, Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, USA. Traducido por la profesora Beatriz Miranda Côrtes M.S. en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional Autónoma de México y Ph.D (c) Historia, Universidad Nacional de Colombia.

La revista *INNOVAR* agradece al profesor Carlos Martínez Becerra, de la Facultad de Ciencias Económicas, por la presentación de este artículo –material de trabajo de su seminario "Geopolítica del Gran Caribe y los Estados Unidos"– al comité editorial para su consideración en términos de evaluación y publicación. Así mismo agradece su colaboración en la elaboración del resumen y la corrección del mismo.

En teoría "Plan Colombia" es un programa del gobierno colombiano que tendrá una duración de dos años con un presupuesto de US\$7.500 millones, en el cual Estados Unidos proveerá la fuerza militar y fondos con otra destinación. De Europa, FMI e Banco Mundial provendrán US\$6.000 millones para programas sociales y económicos que Colombia prepara.

Según diplomáticos no estadounidenses, el esbozo del "Plan Colombia" fue redactado en inglés, no en español. El programa militar (armas, entrenamiento, infraestructura de inteligencia) se inició a finales de 1999, pero "el gobierno colombiano todavía tiene que presentar un programa coherente de inversión social" a mediados del presente año, y pocos gobiernos están "dispuestos a comprometerse con un proyecto estadounidense para limpiar su patio trasero" con el uso de medios ya conocidos por aquellos que no optaron por lo que se llama la "ignorancia intencional"².

Frecuentemente se puede aprender de los modelos sistemáticos; de ahí la importancia de detenerse por un momento en Turquía, anterior líder receptor de ayuda militar. Como el mayor aliado de Estados Unidos e importante avanzada estratégica, Turquía ha recibido sustancial ayuda militar desde los orígenes de la Guerra Fría. Sin embargo, el envío de armas empezó a incrementarse repentinamente en 1984. Es evidente que no hubo ninguna conexión con la Guerra Fría; más bien ese fue el año en que Turquía inició una campaña contrainsurgente de larga escala en el suroriente kurdo, que es además donde están las mayores bases aéreas estadounidenses y sitio de la vigilancia regional; de ahí que todas las cosas que

ocurren allá, sean bien conocidas en Washington. El envío de armas alcanzó su apogeo en 1997. Sólo en ese año excedió el total del período 1950-1983. Aproximadamente el 80% del equipo militar turco, incluido armamento pesado (aviones, tanques, etc.), era provisto por Estados Unidos, evadiendo a menudo las restricciones del Congreso³.

Durante 1999, Turquía debilitó enormemente la resistencia kurda, mediante el terror y la limpieza étnica, ocasionando entre 2 y 3 millones de refugiados; 3.500 pueblos destruidos (7 veces más que en Kosovo bajo las bombas de la OTAN), y cientos de miles de personas muertas, durante la administración Clinton. Ya no se necesitó un gran flujo de armas para alcanzar esos objetivos. Por consiguiente, Turquía puede recibir el galardón por sus "experiencias positivas", al demostrar cómo las medidas contraterroristas, más el diálogo político con los grupos de oposición no terroristas, pueden vencer la plaga de la violencia y de las atrocidades; entonces podemos aprender del editorial del *New York Times*, sobre el último informe del Departamento de Estado donde se describen los esfuerzos de la administración para combatir el terrorismo⁴. Y si fueran necesarias más pruebas de que el cinismo no tiene límites, pocos días más tarde se divulgó un informe sobre las "positivas experiencias de Turquía con fuertes medidas contraterroristas". La comisión parlamentaria de derechos humanos de Turquía describió "un amplio expediente de tortura por parte de la policía", y un "despliegue de equipos de tortura"; y un vocero informó a la prensa que visitas a la región oriental han "confirmado sombrías historias de tortura" en cárceles de la policía, específicamente aquellas de unidades antiterroristas. La comisión dio a conocer el sexto volumen del informe basado en dos años de investigación, con fotografías y otros detalles, confirmando ampliamente la evidencia de que los abusos

1994, capítulos 1,2. Javier Giraldo, S. J., *Colombia: the Genocidal Democracy*, Common Courage, 1996. Para correlaciones, véase Lars Schoultz, *Comparative Politics*, Jan, 1981. Para confirmaciones más amplias e investigaciones que ayudan a explicar las razones, véase Noam Chomsky y Edward Herman, *Political Economy of Human Rights*, South End, 1979, vol. 1, capítulo 2.1.1 y Herman, *The Real Terror Network* South End, 1982, 126ff. Existe una literatura sustancial de estudios de caso.

2. Martin Hodgson, "The coca leaf war", *Bulletin of the Atomic Scientists*, mayo/junio, 2000. Ignorancia intencional es la frase acuñada por los activistas de derechos humanos, Donald Fox y Michael Gleeson, al comentar la decisión de Washington de "no ver" el terror que estaba ocasionando en América Central: "Report to the International Human Rights Law Group and the Washington Office on Latin America", Washington D.C., Abril 21, 1985. Véase también Gleeson "Terrorism and intentional ignorance". Véase *Christian Science Monitor*, Marzo 20, 1986. Véase Chomsky, "Necessary illusions", South End, 1989, 78.

3. *Fiscal Years*. Sobre transferencia de armas, véase Tamar Gabelnick, William Hartung y Jennifer Washburn, *Arming Repression: U.S. Arms Sales to Turkey During the Clinton Administration*, World Policy Institute and Federation of American Scientists, Oct., 1999. Para revisión de los programas contrainsurgentes Estados Unidos-Turquía, véase Chomsky, *New Military Humanism*, Common Courage, 1999.

4. Judith Miller, NYT, abril 30, 2000. Otros grandes triunfadores en la guerra contra el terrorismo son España, por lo menos aquellos miembros del gobierno que todavía no han sido encarcelados por torturas y otras atrocidades, y Argelia, una referencia que no necesita comentario. El informe y la reseña merecen un análisis mucho más profundo, si es necesario más pruebas de que el cinismo no tiene límites.

son sistemáticos y continuos, sin ningún cambio significativo. Estas revelaciones no fueron muy divulgadas, se ignoró el involucramiento de Washington, pero la prensa hizo un gran despliegue en cuanto a la necesidad de mantener severas sanciones en contra de Cuba porque las violaciones de derechos humanos en dicho país, ofenden nuestra sensibilidad humanitaria. Por su parte la investigación parlamentaria sobre las atrocidades en curso, apoyadas ampliamente por Washington, recibió tratamiento marginal en el informe del jefe de la oficina de *Times*, Stephen Kinzer, sobre el progreso actual de Turquía, cuando reconoció la voluntad militar al permitir películas que "muestran la tortura que se expandió en las prisiones militares al principio de los años ochenta⁵.

A pesar del gran éxito alcanzado por algunos de los más violentos estados de terror desde los noventa, las operaciones militares continúan, mientras los kurdos son totalmente privados de los derechos elementales⁶.

El primero de abril de 2000, las tropas turcas empezaron nuevas acciones en las regiones que han sido las más devastadas por las campañas de terror estadounidense-turcas en los años anteriores; además lanzaron otra ofensiva en el norte iraquí para atacar las fuerzas guerrilleras kurdas (PKK) en una zona "de interdicción aérea" donde los kurdos están vigilados por las fuerzas aéreas estadounidenses de un ocasional ataque equivocado. Al ser interrogado sobre el reinicio de las operaciones en Irak, el vocero del Departamento de Estado, James Rubin, dijo que "la política estadounidense permanece igual. Nosotros apoyamos los derechos de



los turcos a defenderse en contra de los ataques de las PKK, puesto que sus incursiones son limitadas en extensión y duración, y se relacionan totalmente con los derechos de los habitantes civiles de la región⁷; de esta manera evadió la pregunta.

James Rubin afirmó que Turquía ha sido "atacada", al explicar que Estados Unidos no ha "reconocido la independencia" de las operaciones militares turcas en esta región de intensa vigilancia y de bombardeos regulares de Estados Unidos.

Tan pronto se reinició la campaña turca, el Secretario de Defensa William Cohen se reunió con el Consejo Estadounidense-Turco en una celebración con mucha algazara, en medio de aplausos según el informe gubernamental⁸. William Cohen agradeció a Turquía por participar en el bombardeo humanitario de Yugoslavia, aparentemente sin ruborizarse, y anunció que Turquía ha sido invitada a unirse en la coproducción del nuevo *Joint Strike Aircraft*, exactamente como ocurrió en la coproducción del F-16 que es usado para apoyar acciones como limpiezas étnicas y atrocidades dentro de su propio territorio, como un miembro fiel de la OTAN.

Sin embargo en Colombia, los militares armados y entrenados por Estados Unidos no han derrotado la subversión doméstica, aunque continúan produciendo regularmente su cuota anual de atrocidades. Cada año, alrededor de 300.000 nuevos refugiados son expulsados de sus hogares, con un total de 3.000 muertos e innumerables masacres horribles. La gran mayoría de atrocidades es atribuida a las fuerzas paramilitares. Éstas están fuertemente vinculadas a los militares, así como lo documentó *Human Rights Watch* en febrero de 2000, y un informe de la ONU, el cual reportó que las fuerzas de seguridad colombiana que se fortalecerán inmensamente con el Plan Colombia mantienen una íntima relación con escuadrones de la muerte, organizan fuerzas paramilitares, o de modo idéntico participan directamente en sus masacres, o

5. Reuters, mayo 9 (Ankara); Agencia Francesa de Noticias, mayo 26, 2000. AP, *Boston Globe*, *Chicago Tribune*; *Washington Post* (brief excerpt), mayo 27, 2000. Anne Kornblut, "Congress sees differences on China, Cuba", BG, mayo 27, 2000. Kinzer, "Turkey Reviews the Darkest Hours in Its Painful Past", NYT, mayo 28, 2000. La actuación de Kinzer en las masivas limpiezas étnicas de Turquía y en las operaciones de terror en los años noventa y de la administración Clinton contribuyeron a éstas, véase *New Military Humanism*. Para revisar los impresionantes hechos de represión de Estados Unidos y el debilitamiento diplomático en Nicaragua, véase "Necessary Illusions".

6. Solamente para ilustrar. Cuando los asaltos militares de abril de 2000 estaban siendo organizados, editores de ocho periódicos en la provincia kurda estaban enfrentando sentencias de tres años de prisión si se les encontraba culpables de referirse a un festival kurdo con la palabra kurda "newroz" en lugar de "nevros", según la ortografía turca. AP Worldstream, marzo 25, 2000

7. Ferit Demer, Reuters, Tuncely, Turkey, abril 1, 2000. Chris Morris, Guardian, London, abril, 3. "Arab league denounces turkish incursión into Iraq", Mena, Cairo, abril 4; Kurdish News Bulletin, 1-16 abril de 2000. AP. Los Angeles Times, abril 2; Rubin, US Dept. of State daily press briefing, abril 4, 2000, M2 Presswire.

8. Federal News Service, Department de Defense Briefing, secretario William Cohen, "Turkey's Importance to 21st Century International Security", Grand Hyatt Hotel, Washington D.C., marzo 31; Charles Aldinger, "U.S. praises key NATO ally Turkey", Reuters, marzo 31, 2000.

por omisión han "posibilitado indudablemente que los grupos paramilitares alcancen sus objetivos exterminadores". En secreto, el Departamento de Estado confirma ese escenario general en su informe anual de derechos humanos y nuevamente en el reporte de 1999, se concluye que las "fuerzas de seguridad colaboraron activamente con miembros de grupos paramilitares", mientras fuerzas gubernamentales continuaban cometiendo numerosos y serios abusos, incluyendo homicidios extrajudiciales en un nivel similar al de 1998, "cuando el informe atribuyó aproximadamente el 80% de atrocidades a los militares y paramilitares". El cuadro es confirmado por Mary Robinson, comisionada de la oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia. Su director, un respetado diplomático sueco, asigna la responsabilidad de la "magnitud y complejidad del fenómeno paramilitar" al gobierno colombiano, y por esta razón indirectamente a su patrocinador estadounidense⁹.

Recurrir a las fuerzas paramilitares para realizar atrocidades es una práctica usual, por razones comprensibles. Serbia en Kosovo e Indonesia en Timor Oriental, son buenos ejemplos de esta práctica, aunque en el último caso los hechos fueron ocultados en favor de la "violencia miliciana" y de elementos falsos, en cuanto fue posible. Hay una larga historia en la práctica de estados terroristas y poderes imperiales.

La Comisión Colombiana de Juristas informó en septiembre de 1999 que la tasa de homicidios se había incrementado en casi 20% con relación al año anterior, y que la proporción atribuible a los paramilitares se ha incrementado del 46% a aproximadamente el 80% en 1998, continuando en ascenso en 1999. La Defensoría del Pueblo de Colombia informó del incremento en un 68% de las masacres durante el primer semestre de 1999 con relación al mismo período de 1998, registrándose diariamente más de una, ampliamente atribuida a los paramilitares. Daniel Bland, investigador de derechos humanos que trabajó en Colombia durante gran parte de los años noventa, concluye que sólo en los tres últimos años, "más de un millón de personas han sido desplazadas de sus hogares en el campo, y entre 5.000 y 7.000 campesinos



Grabado original: Alipio Jaramillo

9. Human Rights Watch, *The Ties that Bind: Colombia and Military-Paramilitary Links*, febrero, 2000. Martin Hodgson, CSM, abril 26, 2000 (UN Report). Departamento de Estado, *Country reports on Human Rights Practices, 1999 y 1998*. Informe 1999 citado por Hodgson, "Coca leaf war". Director diplomático citado por Ana Carrigan, "Dogs of war are loose in Colombia", *Irish Times*, mayo 6, 2000.



inermes han sido asesinados por paramilitares de derecha". De nueve personas que él entrevistó para un documental de derechos humanos en 1997 profesores, periodistas, sacerdotes, trabajadores de derechos humanos, "tres han sido asesinados por pistoleros paramilitares y cuatro han huido con sus familias después de haber recibido amenazas de muerte". Unicef y la Oficina de Derechos Humanos en Colombia, estiman que solamente entre junio y agosto de 2000, 200.000 personas más fueron obligadas a dejar sus hogares¹⁰.

No sería justo responsabilizar a Washington por no preocuparse por el terror paramilitar. El Departamento de Estado ofreció una rueda de prensa después de la publicación de su informe anual en abril de 2000, "describió los esfuerzos de la administración para combatir el terrorismo en el ámbito mundial" y felicitó a Turquía por sus "experiencias positivas" en este propósito común. El coordinador contra el terrorismo Michael Sheehan, fue indagado acerca de por qué los paramilitares colombianos no están incluidos entre los grupos terroristas, a pesar de que el Departamento de Estado los ha reconocido como los responsables de la gran mayoría de atrocidades, que incluyen las más salvajes y constituyen la organización terrorista más violenta y brutal en el hemisferio occidental y una de las más importantes en el mundo. Ellos son además agentes de los más serios crímenes de terrorismo de Estado, debido a su íntima relación con las fuerzas militares de Colombia, y por consiguiente con Estados Unidos. Sheehan explicó que los paramilitares no escapan de los ojos vigilantes de Washington, pero el Departamento no puede adelantar conclusiones. Los terroristas son identificados en el informe solamente después de escrupulosas investigaciones: "Esto es un proceso legal y muy meticuloso". Los paramilitares "están bajo inspección ahora mismo. Si nosotros encontramos un caso y si podemos abordarlo desde nuestra definición legal, ellos serán calificados como terroristas".

En contraste, Cuba satisface fácilmente los requisitos como uno de los siete estados involucrados en el



terrorismo, como se demostró en 85 palabras que fueron incorporadas en un documento de 107 páginas. El Departamento de Estado estaría "absolutamente" listo para llevar su caso en contra de Cuba ante la Corte Internacional, afirmó Sheehan: después de todo, Cuba "tiene vínculos con varias organizaciones terroristas", incluyendo las organizaciones guerrilleras colombianas. Esto satisface al meticuloso criterio del Departamento. Un comentarista realista, puede por definición, añadir que esto ocurre porque Estados Unidos se opone a ellos¹¹.

Podríamos recordar que en los primeros meses de 1999, mientras ocurría diariamente más de una masacre en Colombia, se registró un aito incremento de atrocidades (incluidas muchas masacres) en Timor Oriental, llevadas a cabo por comandos indonesios armados y entrenados por Estados Unidos. Investigadores occidentales creen que tan sólo en una masacre, el 6 de abril, en una iglesia de Liquica, doscientas personas o más fueron asesinadas. Un oficial de la policía estadounidense presente en el escenario comentó que "oficialmente nosotros debemos contabilizar el número de cuerpos que hemos recogido, pero el total de personas muertas en este distrito es mucho, mucho mayor, quizás astronómico". La historia completa jamás será conocida, porque la petición de la misión de la ONU para expertos forenses fue rechazada por Estados Unidos y sus aliados, a diferencia de Kosovo, donde los investigadores abundaron inmediatamente en un esfuerzo para encontrar atrocidades que pudieran proveer justificación retrospectiva para el bombardeo de la OTAN que ellos precipitaron con lógica peculiar¹².

En los casos de Colombia y Timor Oriental, la conducta fue exactamente la misma que con Turquía: apoyo a los asesinos. En iguales condiciones se reportó también una masacre en Racak (Kosovo), el 15 de enero (45 personas asesinadas). Ese hecho provocó tal horror entre los humanistas occidentales, que fue necesario bombardear a Yugoslavia 10 semanas

10. Winifred Tate, Washington Office on Latin America (WOLA), octubre 6, 1999. Comisión Colombiana de Juristas, "Panorama de los derechos humanos y del derecho humanitario en Colombia: 1999", septiembre, 1999. Véanse Colombia Update- 11.3-4, Invierno/Primavera, 2000; Bland, "Colombia: Don't forget the lesson of Salvador", LAT, abril 10, 2000. UNICEF, CODHES, citado por Maurice Lemoine, "The Endless Undeclared Civil War", *Le Monde Diplomatique*, mayo, 2000.

11. Federal News Service, mayo 1, 2000, Informe del Departamento de Estado.

12. Lindsay Murdoch, *The Age*, Australia, abril 8; Barry Wain, editor Asia, *Wall Street Journal*, (edición Asia), abril 17, 2000. Sobre Timor Oriental y Kosovo veáanse mis ensayos "En Retrospect" y "Green Light for War Crimes", publicados en varias lenguas y versiones en 1999-2000, en "A New Generation Draws the Line: Kosovo, East Timor and the Variable Standards of the West", Verso 2000.

después. La expectativa fue rápidamente satisfecha, seguida de una abrupta escalada de atrocidades.

El proceso siguiente de autoadulación, el cual ocurre pocas veces, anunció la "nueva era en asuntos humanos", en la que los "estados ilustrados" se dedicarán apostólicamente a la defensa de los derechos humanos, por primera vez en la historia, guiados por "principios y valores"¹³. Dejando de lado los hechos actuales sobre Kosovo, la actuación fue en gran parte facilitada por el silencio o la manipulación de la información sobre la participación activa de los mismos poderes en atrocidades iguales o peores en ese momento.

Retornando a Colombia, importantes activistas de derechos humanos continúan saliendo del país bajo amenazas de muerte, como es el caso del valiente líder del grupo religioso de derechos humanos *Justicia y Paz*, padre Javier Giraldo, quien ha desempeñado un papel sobresaliente en la defensa de los derechos humanos. La AFL-CIO reporta que varios líderes sindicales son asesinados cada semana, la mayoría por paramilitares apoyados por fuerzas de seguridad del gobierno. Los desplazamientos forzados en 1998 fueron 20% mayores que en 1997, y se incrementaron nuevamente en 1999, en algunas regiones según la Human Rights Watch. Colombia ahora tiene la mayor población desplazada en el mundo, después de Sudán y Angola¹⁴.

Aclamada como una destacada democracia por Clinton y otros líderes y analistas políticos estadounidenses, Colombia finalmente permitió la existencia de un partido independiente (la UP, Unión Patriótica) para desafiar el viejo sistema de elite de poder compartido. Sin embargo, la UP, fundada por guerrilleros (principalmente por las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y organizada en parte por sus miembros, enfrentó obstáculos, incluido el rápido asesinato de aproximadamente 3.000 activistas, entre ellos, candidatos presidenciales, alcaldes y legisladores. Los resultados enseñaron a los guerrilleros acerca de los escenarios para ingresar al sistema político¹⁵. El

nuevo proyecto de partido (Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia) "permanecerá clandestino por ahora para prevenir que sus líderes sean asesinados, afirmaron los comandantes de las FARC"¹⁶.

Washington también aprendió de éstos y otros eventos del mismo período. La administración de Clinton estuvo particularmente impresionada con el desempeño del presidente César Gaviria, quien gobernó durante una escalada de terror estatal; tal fue la impresión que produjo que algunos dicen que esa administración obligó a la Organización de los Estados Americanos a aceptarlo como Secretario General, dado que "él había incentivado la construcción de instituciones democráticas en un país donde hacerlo fue algunas veces peligroso" lo que se debió, en gran medida, a algunas acciones de su gobierno. Tal vez una razón más significativa, es que Gaviria fue también un defensor de la reforma económica en Colombia y de la integración económica en el hemisferio", palabras codificadas que pueden ser fácilmente interpretadas¹⁷.

Entre tanto, las deplorables condiciones socioeconómicas persisten, dejando a la mayoría de la población en la miseria en un país rico, con concentraciones de riqueza y de terratenientes que son altas, aun para los vergonzosos niveles de América Latina, en general. La situación se volvió peor en 1990 como resultado de las "reformas neoliberales" formalizadas en la Constitución de 1991, las cuales redujeron todavía más la "participación efectiva de la sociedad civil en la formación política mediante reformas dirigidas a ampliar el poder ejecutivo y reducir la autonomía de las ramas legislativa y judicial, y mediante un plan macroeconómico concentrado en las manos de un pequeño círculo de tecnócratas" subordinados a Washington. Las "reformas neoliberales han incrementado de manera alarmante los niveles de pobreza y desigualdad. Aproximadamente el 55% de la población colombiana vive por debajo del nivel de pobreza y esta situación ha sido agravada por una severa crisis en la agricultura, como resultado del programa neoliberal"¹⁸,

13. Véase *The New Military Humanism* para detalles y fuentes

14. AFL - CIO, reporte "Situation of Labor in Colombia and U.S. Policy", febrero 17, 2000, distribuido por Wola, Human Rights Watch, World Report 2000 ,HRW, diciembre, 1999.

15. En abril de 2000, las FARC anunciaron la formación de un nuevo partido político, el Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia, con el objetivo de buscar "un nuevo ambiente político, social y económico (...) que haría que el uso de las armas fuera innecesario". AP, abril 30, *Miami Herald* website,

y Reuters, *El Nuevo Herald* (Miami), citado en *Weekly News Update on the Americas*, Publicación No. 535, abril 30, 2000 p. 339 Lafayette St., New York 10012.

16. Vivian Sequera, AP, BG, Abril 30, 2000.

17. Steven Greenhouse, NYT, marzo 15, 1994. Véase *World Orders* para más citas y comentarios.

18. Arlene Tickner, coordinadora general del Centro para Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes, Bogotá, "Colombia: chronicle of a crisis foretold. *Current History*, febrero, 1998.

lo mismo que ha ocurrido en América Latina, en general.

El respetado presidente del Comité Permanente para Derechos Humanos de Colombia, ex-ministro de Relaciones Exteriores Alfredo Vásquez Carrizosa, escribe que es la "pobreza y la insuficiente reforma agraria" lo que ha transformado a Colombia en uno de los países más trágicos de América Latina, aunque allí como en muchos otros lugares, "la violencia ha sido exacerbada por factores externos, primeramente por las iniciativas de la administración Kennedy, "la cual hizo grandes esfuerzos para transformar nuestros ejércitos regulares en brigadas contrainsurgentes". Estas iniciativas generaron lo que se conoce en América Latina como la "Doctrina de Seguridad Nacional", la cual no profesa "la defensa en contra de un enemigo externo", sino en contra "del enemigo interno." La nueva "estrategia de escuadrones de la muerte", según los militares, es "el derecho de combatir y exterminar trabajadores sociales, sindicalistas, hombres y mujeres que no están apoyando el establecimiento y quienes son acusados de ser comunistas radicales".

El objetivo general, como explicó Lars Schoultz, el principal académico norteamericano experto en derechos humanos en América Latina, fue destruir la persistente amenaza a la estructura socioeconómica privilegiada existente mediante la eliminación de la participación política de la mayoría numérica, "las clases populares"¹⁹.

Como parte de su estrategia para transformar a los ejércitos latinoamericanos de funciones de "defensa hemisférica" en "seguridad interna" significando guerra contra la población doméstica, Kennedy despachó una misión militar a Colombia en 1962, comandada por el general de Fuerzas Especiales, William Yarborough. El general propuso "reformas" con el fin habilitar las fuerzas de seguridad para una necesaria actuación paramilitar, sabotaje y/o actividades

terroristas en contra de conocidos elementos comunistas," "los comunistas radicales" a quienes Vásquez Carrizosa alude²⁰.

Poco después, Lindon Johnson retomó la guerra de Kennedy contra Vietnam del Sur, llamada aquí "la defensa del Vietnam del Sur", así como Rusia llamó su guerra contra Afganistán "la defensa de Afganistán". En enero de 1965, las fuerzas especiales de Estados Unidos en Vietnam del Sur recibieron la orden de "conducir operaciones para expulsar los oficiales controlados Vietcong, incluyendo asesinatos" y, más generalmente, el uso de técnicas de "pacificación" como "asalto, sabotaje y actos de terrorismo contra el personal del Vietcong", homólogos de los "conocidos elementos comunistas" en Colombia²¹.

Una comisión gubernamental colombiana concluyó que "la criminalización de la protesta social" es uno de los "principales factores que permiten e incentivan la violación de los derechos humanos por los militares, autoridades policiales y sus colaboradores paramilitares. Debido a que hace 10 años, el estado de terror en el patio trasero de Estados Unidos se estaba incrementando, el Ministro de Defensa llamó a una guerra total en los escenarios políticos, económicos y sociales", mientras otro importante oficial militar explicó que las guerrillas eran de importancia secundaria: "el peligro real" es "lo que los insurgentes han llamado guerra psicológica y política", la guerra "para controlar a los sectores populares" y "para manipular a las masas". "Los "subversivos" desean influenciar los sindicatos, universidades, medios, etc.

"Todos los individuos que de una u otra manera apoyan los objetivos del enemigo deben ser considerados traidores y tratados como tal", como prescribió un manual militar en 1963, al tiempo que las iniciativas de Kennedy estaban en movimiento. Dado que el

19. Lars Schoultz, *Human Rights and United States Policy toward Latin America*, Princeton, 1981, 7, Vásquez Carrizosa, y para mayor análisis véanse las referencias de la nota 1.

20. Michael McClintoc, "American Doctrine and Counterinsurgent State Terror" en A. George, ed., *Western State Terrorism Policy*-Blackwell, 1991, 139; *Instruments of Statecraft*, Pantheon, 1992, p. 222.

21. *Ibid.*, p. 227.



objetivo oficial de las guerrillas es la democracia social, el círculo de acciones que tiene por objetivo las operaciones de terror es amplio²².

En los años siguientes, la estrategia Kennedy-Yarborough fue desarrollada y aplicada en "nuestra pequeña región", como describía al hemisferio occidental el Secretario de Defensa Henry Stimson al explicar por qué Estados Unidos estaba autorizado para controlar su propio sistema regional mientras todos los demás iban a ser desmantelados. La represión violenta se expandió por toda América Latina, comenzando en el cono sur, y llegando al máximo en América Central en los años ochenta, dado que el Norte respondió con extrema violencia a los esfuerzos de la Iglesia y otros "subversivos" para enfrentar una terrible herencia de miseria y represión. El avance de Colombia al primer lugar entre los estados criminales en "nuestra pequeña región", es en parte el resultado del declive del estado de terror manejado por Estados Unidos en América Central, el cual logró sus objetivos principales como sucedería en Turquía diez años después dejando a su paso una "cultura de terror" que "domestica las expectativas de la mayoría y subestima aspiraciones hacia alternativas que se diferencien de aquellas de los poderosos", según palabras de Salvadoran Jesuits, quien aprendió las lecciones de la amarga experiencia como sobreviviente al asalto de Estados Unidos.

En Colombia, sin embargo, el problema de establecer formas de democracia y estabilidad se mantiene e incluso se hace cada vez más urgente. Existen dos opciones: una de ellas es atender las necesidades e intereses de la mayoría pobre; la otra, es proveer

armas y entrenamiento militar para mantener las cosas como están.

Como era de esperarse, el anuncio del Plan Colombia generó respuestas por parte de las guerrillas, en particular una exigencia según la cual todas las personas que poseen más de un millón de dólares deben pagar una "impuesto revolucionario", o enfrentarán una amenaza de secuestro. Los motivos son explicados por el *London Financial Times*: para las FARC, la financiación es requerida para luchar en condiciones de igualdad. Por su parte el gobierno está solicitando a los Estados Unidos US\$1.3 millones en ayuda militar, fundamentalmente para operaciones antidrogas, pero las FARC creen que las nuevas armas serán utilizadas en la operación en su contra. Parecen listos para armarse para la batalla, la escalada militar y el debilitamiento de las negociaciones de paz en curso²³.

De acuerdo con el reportero del *New York Times*, Larry Rohter, "los colombianos comunes" están "irritados" con las negociaciones de paz del gobierno, que cedieron a las FARC el control de una extensa región que ellos ya controlaban, y los "angustiados residentes" de aquella región también se oponen a las guerrillas. Ninguna evidencia es citada. El analista colombiano Alfredo Rangel tiene una visión distinta; él le recuerda a los entrevistadores "que las FARC tienen un apoyo significativo en la región en donde operan", reporta Alma Guillermoprieto. Rangel cita la "destreza de las FARC para hacer ataques sorpresivos" en diferentes partes del país, un hecho que es "políticamente significativo" porque "en cada caso, una simple advertencia de la población civil podría ser suficiente para alertar al ejército, y esto no ocurre"²⁴.

22. Sobre el programa de las guerrillas, véanse Andrés Cala, "The Enigmatic Guerrilla: FARC's Manuel Marulanda", *Current History*, febrero, 2000; Karen DeYoung, "Colombia's Non Drug Rebellion", *Washington Post National Weekly*, abril, 17, 2000; Lemoine, *op. cit.* Véase también FARC "Agenda for negotiations", en Adam Isacson, "The Colombian Dilemma", reporte de Política Internacional, febrero de 2000, Centro para la Política Internacional, Washington, DC.

23. James Wilson, "Rebels tax plan outrages Colombia". FT, abril 28, 2000 y también Carrigan, *op. cit.*

24. Rohter, "Colombia Agrees to Turn Over Territory to Another Rebel Group", NYT, abril, 26; Guillermoprieto, *New York Review*, mayo 11, 2000. Para mayor análisis véase Lemoine, *op. cit.* donde se discute la simpatía de los campesinos y trabajadores por las FARC, pues ven a esta organización como "el ejército de los pobres", principalmente las mujeres, que ahora



La situación no es desconocida. La ofensiva Tet en todo el Vietnam del Sur en enero de 1968, tanto en ciudades como en áreas rurales, es un ejemplo que debe ser bien conocido. Todo el territorio fue ocupado por más de un millón y medio de tropas norteamericanas, con un gran ejército y aparatos policiales. La acción de las guerrillas de Vietnam del Sur se produjo activamente revelando qué tan profundamente las guerrillas estaban arraigadas en la población general. (Las fuerzas vietnamitas del norte fueron ampliamente confinadas en las regiones fronterizas según la inteligencia estadounidense). A pesar de que se han construido más relatos en el curso de la historia, los hechos fueron suficientemente claros para convencer a las elites estadounidenses de que el esfuerzo para combatir la resistencia en Vietnam del Sur fue muy costoso.



El mismo día en que *Rohter* publicó sobre "el disgusto de los colombianos del común", el *London Financial Times* también informó sobre las audiencias públicas, un "foro innovador" realizado en la región controlada por las FARC. Se refiere a uno de los muchos realizados allá, para que "el público participe en los actuales diálogos de paz". Los asistentes vienen de todas las partes de Colombia, hablan ante las cámaras de televisión y se reúnen con líderes de las FARC. En las audiencias han participado líderes empresariales, dirigentes gremiales, terratenientes y otros. Un líder sindical proveniente de la segunda ciudad más grande de Colombia, Cali, dirigiéndose a los líderes de las FARC y al gobierno, criticó "a aquellos que creen que hablando pondrán fin al largo conflicto del país". El asistente dirigió sus observaciones principalmente al señor Marulanda, el líder campesino de las FARC, por largo tiempo, "quien minutos antes había recibido una calurosa ovación, cuando dijo que "el desempleo no es un problema provocado por la violencia, sino por el gobierno nacional y por los empresarios de este país". Los líderes empresariales intervinieron, pero "fueron interrumpidos por los representantes sindicales que también hablaron".

En contra de prácticas "populistas", un vocero de las FARC "presentó una de las visiones más claras hasta ahora sobre el programa económico nacional según su organización", convocando a congelar las privatizaciones, a subsidiar la energía y la agricultura como se hace en los países ricos, y a estimular la economía mediante protección de las empresas locales. Sin embargo, el representante del gobierno, "destacó el crecimiento de la exportación y la participación privada" describió la afirmación de las FARC como "materia prima para las negociaciones", a pesar de que las FARC "demostraron el evidente descontento popular con relación a las políticas gubernamentales neoliberales", y argumentaron que aquellos que "han monopolizado el poder" deben participar de las negociaciones²⁵.

La escalada potencial del Plan Colombia hace parte de los proyectos militares regionales de Estados Unidos. En efecto, la prensa salvadoreña reporta un acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador, que todavía debe ser ratificado por el Congreso salvadoreño, para permitir que la Marina de Guerra norteamericana use el aeropuerto salvadoreño para una Forward Operating Location, FOL, además de que la Fuerza Aérea estadounidense utilice el puerto ecuatoriano en la ciudad de Manta y las colonias holandesas de Aruba y Curazao. Los acuerdos intergubernamentales conceden a Estados Unidos libre movimiento de aeronaves y armas, sin que se permita el control o las inspecciones locales.

Los expertos militares ecuatorianos han expresado su preocupación por el hecho de que la "base militar de Manta, esté siendo probablemente preparada para un eventual bombardeo aéreo, el estilo de Kosovo, una guerra aérea y marítima

constituyen un tercio de estas fuerzas, debido a que esta organización rompe con las prácticas opresivas y degradantes que son particularmente duras en condiciones de pobreza y desesperación.

25. James Wilson, "Colombia's citizens get the chance to confront rebels", FT, abril 26, 2000.



promovida desde las bases utilizadas por Estados Unidos en la región, en la cual aviones y misiles podrán desempeñar un papel principal"²⁶.

El Plan Colombia es justificado oficialmente en términos de la "guerra contra las drogas"²⁷, versión tomada en serio por pocos analistas competentes. La DEA reporta que "todas las instancias del gobierno" en Colombia están involucradas con la "corrupción relativa a las drogas". En noviembre de 1998, inspectores de la aduana estadounidense y la DEA encontraron 415 kilos de cocaína y 6 kilos de heroína en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana que había aterrizado en Florida, lo que produjo el arresto de varios oficiales y del personal técnico y auxiliar²⁸. Otros observadores han reportado el fuerte involucramiento de militares colombianos y de militares estadounidenses en el narcotráfico. La esposa del coronel James Hiatt se declaró culpable de complicidad en el contrabando de heroína desde Colombia hacia Nueva York, y poco tiempo después el mismo coronel Hiatt, quien estaba a cargo de las tropas estadounidenses que entrenaron las fuerzas de seguridad colombianas en "operaciones contra narcóticos", "se declararía culpable" por complicidad²⁹.

Por su parte, los paramilitares admitieron abiertamente su involucramiento con las drogas. En una entrevista por televisión concedida al corresponsal John Donnelly, en marzo de 2000, Castaño admitió que el comercio de la droga provee el 70% de los

fondos del grupo. Ésta fue la primera aparición de Castaño líder de la mayor y más brutal organización de paramilitares, en la televisión colombiana. Castaño afirmó comandar una fuerza de 11.200 hombres "financiados por extorsión e ingresos provenientes de 30.000 hectáreas de plantaciones de coca en el Norte de Santander"³⁰. Según observaciones de Donnelly, a pesar de que "las ofensivas financiadas por Estados Unidos tienen claras las áreas controladas por las fuerzas paramilitares", los blancos del Plan Colombia son las guerrillas apoyadas por los campesinos que están clamando por un cambio social interno, el cual interferiría en la integración de Colombia al sistema global en los términos en que Estados Unidos lo requiere: dominio de elites vinculadas a intereses poderosos de Estados Unidos que están de acuerdo con el acceso privilegiado a los valiosos recursos colombianos, como el petróleo... factor significativo subyacente del Plan Colombia.

Bajo los criterios de la terminología estadounidense, las FARC son "narcoguerrillas", un concepto útil como fachada para la contrainsurgencia, pero que ha sido rebatido por reconocidos observadores. Los líderes de las FARC dicen que ellos dependen de la producción de coca recurriendo al cobro de impuestos de las plantaciones de coca, así como impuestos que han establecido a otros negocios. Según Klaus Nyholm, quien dirige el Programa de Control de Drogas de la ONU, que cuenta con agentes en todas las regiones productoras de droga "los guerrilleros son distintos a los narcotraficantes". Nyholm cree que los frentes locales de las FARC son "bastante autónomos"³¹. En algunas áreas "ellos no están para nada involucrados" en la producción de coca y en otras "ellos piden a los campesinos que no cultiven coca". Ricardo Vargas, experto en droga de la región andina, describe el papel de las guerrillas como "basado sobre todo en el cobro de impuestos sobre

26. La Prensa Gráfica San Salvador, abril 28, citado en *Weekly News Update on the Americas*, No. 535, abril 30, 2000; actualizaciones anteriores también citadas. Kintto Lucas, *Interpress Service* Quito, Ecuador, marzo 23, 2000.

27. Para documentación y análisis, véase particularmente Arnold Chien, Margaret Connors y Kennedy Fox, "The Drug War in Perspective", en J. Y. Kim, J. Millen, A. Irwin y J. Gershman, eds., *Dying For Growth, Common Courage*, 2000, Institute for Health and Social Justice /Partners in Health, Cambridge MA.

28. General Accounting Office, *Drug Control: Narcotics Threat from Colombia continues to grow*, Washington DC, junio, 1999.

29. Alan Feuer, "U.S: Colonel is implicated in Drug Case," NYT, abril 4, 2000.

30. Donnelly, BG, marzo 9: "Paramilitary leader goes public", *Latinamerica Press* Perú, marzo 20, 2000.

31. DeYoung, *op. cit.*



cultivos ilícitos". Ellos han hecho un llamado para un "plan de desarrollo dirigido a los campesinos" que "permitiría la erradicación de la coca sobre la base de plantaciones alternativas". "Esto es todo lo que nosotros queremos", ha anunciado públicamente Manuel Marulanda, líder de las FARC. En igual sentido se han pronunciado otros voceros³².

Pero dejemos esos asuntos a un lado, y consideremos un poco otras cuestiones.

¿Por qué los campesinos en Colombia plantan coca y no otro tipo de cultivo? Las razones son comprensibles. "Los campesinos plantan coca y amapola", observa Vargas, "debido a la crisis en el sector agrícola de los países latinoamericanos, agudizada por la crisis económica en la región". Los campesinos empezaron la colonización de la región amazónica en los años cincuenta, escribe Vargas, "por el desplazamiento violento causado por grandes terratenientes", y ellos encontraron que la coca era "el único producto rentable y fácil de comercializar al mismo tiempo".

Las presiones sobre los campesinos se incrementaron principalmente por parte de los "terrateñientes, inversionistas y comerciantes legales que han creado y fortalecido los ejércitos privados", —los paramilitares— que "sirven como un medio para expropiar violentamente las tierras de los indígenas, de los campesinos y de los colonos". Como consecuencia, ahora los "traficantes controlan la mayoría de las mejores tierras de Colombia". Según Vargas, los batallones de contrainsurgencia, armados y entrenados por Estados Unidos, no atacan a los traficantes, sino que tienen como blanco al eslabón más débil y socialmente más frágil de la cadena de drogas: la producción de los campesinos, los colonos y los indígenas. Lo mismo ocurre con el uso de armas químicas y biológicas que Washington emplea experimentalmente violando las especificaciones de los fabricantes y pasando por encima de las objeciones del gobierno colombiano y de las asociaciones agrícolas. Estas medidas multiplican los "peligros para la población civil, el medio ambiente y la agricultura legal". Estas prácticas destruyen "el cultivo de productos agrícolas legales como yuca y bananos, fuentes de agua, pastos y animales domésticos, así como todas

las plantaciones incluidas en los programas de sustitución de cultivos", e incluso aquellos proyectos desarrollados por líderes eclesiásticos para implementar alternativas a la producción de la coca. También hay inciertos pero severos efectos "en el frágil ambiente del bosque tropical"³³.

Los programas tradicionales de Estados Unidos, así como el reciente Plan Colombia, apoyan básicamente a las fuerzas sociales controladas por el gobierno y el sistema militar/paramilitar, que han creado el problema mediante presión y violencia. Los blancos son las víctimas de siempre.

Existen otros factores que han incentivado la producción de coca. A pesar de que Colombia fue uno de los mayores productores de trigo, su producción fue debilitada en la década de los cincuenta mediante la ayuda denominada "Alimentos para la Paz", programa que proveía subsidios a los agricultores estadounidenses e inducía a otros países a tornarse dependientes de Estados Unidos en términos alimentarios" (senador Hubert Humphrey, representante de los exportadores agrícolas de *Midwest*); por su parte Estados Unidos recibía fondos que por lo general eran usados para el gasto militar y la contrainsurgencia.

32. Cala, *op. cit.* Ricardo Vargas Meza, "The revolutionary Armed forces of Colombia (FARC) and The Illicit Drug Trade", Acción Andina- Bolivia, TNI Netherlands, WOLA, Washington DC, junio, 1999.

33. *Ibid.* Véanse También Vargas, "Drug Cultivation, Fumigation and the Conflict in Colombia", TNI y Acción Andina Colombia, Oct. 1999; Hodgson, "Coca leaf war" y Larry Rohter, "Colombia Tries, Yet Cocaine Thrives", *NYT*, noviembre 20, 1999. Hubo oposición por parte del gobierno colombiano y pequeños propietarios de tierra en cuanto a la insistencia estadounidense sobre los programas de destrucción de cultivos, por encima de los programas de sustitución de cultivos. Acerca de los recientes planes para el uso de armas biológicas además de las armas químicas usuales, véase "UN to unleash biowar against Colombian cocaine plant", Agencia France Presse, marzo 8, 2000. Un artículo en el *British Journal New Scientist* (marzo 9) estaba informando sobre un plan elaborado por Estados Unidos y la ONU para conducir pruebas en campo abierto de un hongo (*Fusarium oxysporum*) hasta ahora probadas solamente en los invernaderos del gobierno de Estados Unidos. "La táctica de la guerra biológica está siendo considerada debido a que la explosión de crímenes para destruir la producción de coca ha fallado", reporta AFP. Los pequeños propietarios de tierra en Perú afirman que el hongo que ha reducido la producción de coca allá "ha sufrido mutaciones y está matando muchos cultivos tradicionales, incluyendo banano, cacao, café, maíz, limoncillo, papaya y yuca", pero los oficiales gubernamentales estadounidenses insisten en que los cargos contra ellos sobre su conexión con el hongo son infundados. Eric Lyman, "U.S. accused of creating blight killing coca plants and harming other crops", *San Francisco Chronicle*, noviembre 4, 1999.

Paradójicamente, un año antes de que el presidente Bush anunciara una vez más con gran espectáculo la "guerra antidroga", el acuerdo internacional del café fue suspendido debido a las presiones de Estados Unidos, bajo el pretexto de "transgresiones de las normas comerciales". El resultado fue una caída de precios de más de 40% en dos meses, curiosamente del producto que lidera la exportación legal de Colombia³⁴.



Factores relativos son discutidos por la economista política Susan Strange en su último libro³⁵. En 1960, el grupo de los 77 (ahora 133, y que poseen el 80% de la población mundial) inició un llamado para un "nuevo orden económico internacional", en el cual las necesidades de la gran mayoría de personas del mundo deberían provocar un consenso importante. Propuestas específicas fueron elaboradas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) que fue establecida en 1964 "para crear un sistema de comercio internacional consistente con la promoción del desarrollo económico y social". Las propuestas de la UNCTAD y el llamado para el "nuevo orden internacional" fueron inmediatamente rechazados por los grandes poderes. Estados Unidos, en particular, insistió en

que el "desarrollo no es un derecho", y que era un "absurdo" y "una incitación peligrosa" mantenerse de acuerdo con las previsiones socioeconómicas de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que Estados Unidos rechaza³⁶. El mundo se movió, o más exactamente fue movido hacia un nuevo orden económico internacional por vía distinta, para satisfacer las necesidades de sus promotores. La doctrina modelo establecida bajo la forma de globalización puede ser descrita como un proceso inexorable para el cual "no hay alternativa" (TINA), como lo sugirió Margareth Thatcher.

Al principio la propuesta de la UNCTAD fue un programa para estabilizar precios de bienes, práctica rutinaria en los países industrializados mediante subsidios públicos, aunque esto fue brevemente amenazado en el Congreso estadounidense cuando la derecha llegó al poder en 1994 y parecía creer en su propia retórica. Era grande la consternación de los líderes empresariales, quienes entendían que la defensa del mercado es para los menos competitivos, no para ellos. Las ideologías arrogantes de libre mercado fueron bien enseñadas, pero no antes de que el Congreso aprobara en 1996 el *Freedom to Farm Act* para liberar la agricultura estadounidense del "New Deal de los programas socialistas de Alemania Oriental", como lo estableció *Newt Gingrich*, al proteger mercados distorsionados por los subsidios que se triplicaron alcanzando un récord de US\$23 billones en 1999, con la posibilidad de incrementarse aún más. Sin embargo, el mercado ha hecho su magia: el subsidio del pagador de impuestos se dirige de forma desproporcionada a la agroindustria y a los "oligopolios" que dominan la compra y la venta, según Nicholas Kristof. Aquellos que tienen poder de mercado en la cadena de alimentos (desde corporaciones energéticas hasta los que

34. Walter LaFeber, "The Alliances in Retrospect" en A. Maguire y J. W. Brown *Bordering on Trouble: Resources and Politics in Latin America* Adler y Adler, 1986. Joseph Treastr, "Coffee Impasse Imperils Colombia's Drug Fight", *NYT*, septiembre, 24, 1988. Sobre alimentos para la paz y los efectos de los "subsidios de exportación" de los Estados Unidos y sobre el uso de los fondos de contrapartida", véase William Borden, "The Pacific Alliance: United States Foreign Economic Policy and Japanese Trade Recover, 1947-1955, Wisconsin, 1984, 182ff; de manera más general Tim Barry y Deb Preusch, *The Soft War*, Grove, 1988. Sobre los antecedentes véase también Chien et al., *op. cit.*

35. Strange, *Mad Money: When Markets Outgrow Governments*, U. of Michigan Press, 1998, 127.

36. Véase capítulo 10.

venden al por menor) están disfrutando de grandes beneficios, mientras la crisis agrícola, que es real, está ubicada en medio de la cadena, en donde se ubican los pequeños granjeros, que producen alimentos³⁷.

Uno de los principios motores de la historia económica moderna es que los dispositivos usados por los ricos y poderosos para asegurar que ellos estén protegidos por el Estado paternalista, no están disponibles para los pobres.

La iniciativa de la UNCTAD para estabilizar los precios de los productos básicos ha sido ampliamente marginada y sometida, así como otras que reflejan los intereses de la mayoría global³⁸.

Revisando estos hechos, Strange observa que los pequeños propietarios de tierra fueron obligados a cambiar sus cultivos por aquellos que poseen un mercado estable. La agroindustria de gran escala puede tolerar fluctuaciones de precios de los bienes, compensando sus pérdidas temporales diversificando mercados. Los campesinos pobres no pueden decir a sus niños: "no te preocupes, tal vez tengas algo para comer el próximo año". El resultado, según Strange, es que los empresarios de la droga fácilmente pueden encontrar campesinos ávidos por plantar coca, marihuana u opio", porque siempre hay un mercado abierto a estos productos en las sociedades ricas.

Otros programas de Estados Unidos y de las instituciones globales dominadas por este país magnifican estos efectos. El reciente plan Clinton para Colombia

sólo incluye fondos parciales para cultivos alternativos, pero ninguno de ellos está destinado a áreas controladas por la guerrilla, a pesar de que líderes de las FARC han expresado repetidamente su deseo de que se provean estas alternativas para evitar que los campesinos se vean forzados a cultivar la coca para sobrevivir. A finales de 1999, Estados Unidos había gastado un gran total de US\$750,000 en "programas de desarrollo alternativo". Según el Centro de Política Internacional, esta cifra fue invertida en "las áreas de plantaciones de amapola que están lejos de la planicie sur", blancos del Plan Colombia. Sin embargo, el Plan incorpora recursos para "la asistencia de civiles desplazados debido a la presión en el sur de Colombia", sección del Plan que el centro encontró "especialmente preocupante." A pesar de las oposiciones del gobierno colombiano, la administración Clinton también insiste en que cualquier acuerdo de paz debe permitir medidas de destrucción de cultivos ilícitos³⁹. Estados Unidos se concentrará en las operaciones militares, que casualmente benefician las industrias de alta tecnología que producen equipo militar, involucradas como "apoyo extensivo" del Plan Colombia y a la *Occidental Petroleum*, la cual tiene grandes inversiones en Colombia, entre otras corporaciones⁴⁰.

De otra parte, el FMI-Banco Mundial recomiendan que los países abran sus fronteras a productos agrícolas de los países ricos (altamente subsidiados), con los efectos obvios de debilitamiento de la producción local. Los desplazados se ubican en zonas marginales urbanas (de este modo, los inversionistas extranjeros abaratan salarios), o se instruyen para volverse "un campesino racional", produciendo para el mercado de exportación y buscando los precios más altos, lo que significa "coca, marihuana o heroína". Teniendo sus lecciones debidamente aprendidas, ellos son premiados con los ataques de las armas, además de que sus campos son destruidos por una guerra química y biológica, cortesía de Washington.

37. Tim Weiner, "Congress Agrees to \$7.1 Billion in Farm Aid", *NYT*, abril 14; Nicolas Kristof, "As Life for Family Farmers Worsens, the Toughest Wither", *NYT*, abril 2; Laurent Belsie, "Collapse of free market farm economy?", *CSM*, marzo 23, 2000. Para detalles y análisis informativo véase National Farmers Union (Saskatoon SK, Canada), *The Farm Crisis, EU Subsidies, and Agribusiness Market Power*, Ottawa, febrero 17, 2000; reporte presentado al Comité Permanente del Senado Canadiense para la Agricultura y Silvicultura.

38. Una reciente ilustración es la Declaración de la Cumbre del Sur realizada en la Habana, en abril de 2000. Los participantes condenaron las formas de "globalización" instituidas por el Occidente e hicieron un llamado para un sistema económico internacional, el cual será justo y democrático, enfatizando el "derecho al desarrollo" que Estados Unidos rechaza. También condenaron "el llamado derecho a intervención humanitaria" y cualquier intervención militar o económica con muchos cargos específicos y propuestas con el fin de evitar que los países desarrollen su propio sistema político, económico, social y cultural. Como es usual, la declaración de los países, que tienen el 80% de la población mundial, fue ignorada.

39. Adam Isacson, "Getting in Deeper", International Policy Report, febrero, 2000, CIP. Linda Robinson, *World Policy Journal*, invierno, 1999-2000; Cala, *op. cit.* Larry Rohter, *NYT*, noviembre 20, 1999, reportando la consternación de los oficiales colombianos quienes están invalidados; Rohter, "To Colombians, Drug War is Toxic Foe", *NYT*, mayo 1, 2000, sobre los efectos de la fumigación en violación de las regulaciones (aplicadas en Estados Unidos) y las negaciones de la Embajada de Estados Unidos. Véase nota 32.

40. Gwen Robinson y James Wilson, *FT*, marzo 30; Michael Isikoff, Gregory Vistica, Steven Ambrus, "The Other Drug War", *Newsweek* abril 3, 2000.

La situación anterior ha sido un hecho en toda la región andina. Estos temas salieron brevemente a la luz pública, exactamente cuando se debatía el Plan Colombia en Washington. El 8 de abril, el gobierno de Bolivia se declaró en estado de emergencia después de la explosión de protestas que cerraron la ciudad de Cochabamba, la tercera ciudad más grande de Bolivia. Las protestas estaban dirigidas contra la privatización del sistema público de agua y el fuerte aumento de las tarifas superiores a la capacidad de pago de la mayoría de la población. En el fondo es un reflejo de crisis económica, atribuida en parte a las políticas neoliberales que culminaron en la guerra contra las drogas, la cual destruyó más de la mitad de la producción de hojas de coca del país, dejando a los "campesinos racionales desamparados". Una semana más tarde los pequeños propietarios de tierra bloquearon una carretera cerca de La Paz para protestar por la erradicación de la hoja de coca, el único modo de supervivencia que les dejaron las "reformas" tal como fueron implementadas.

Relatando las protestas contra las tarifas del agua y los programas de erradicación, *The Financial Times* observó que "El Banco Mundial y el FMI presentaron a Bolivia como modelo", uno de los grandes éxitos históricos del "consenso de Washington", pero las manifestaciones de protesta de abril revelan que "el éxito de los programas de erradicación en Perú y en Bolivia ha provocado un alto costo social". El periódico cita a un diplomático europeo en Bolivia que afirma que "hace dos semanas, Bolivia era considerada un éxito histórico", por aquellos que tomaban en cuenta el país ignorando la suerte de su población. Pero ahora, continúa el diplomático, "la comunidad internacional tiene que reconocer que las reformas económicas no han hecho realmente nada para resolver el incremento del problema de la pobreza"; por el contrario, esas reformas pueden haberlo profundizado. El secretario de la Conferencia de los obispos bolivianos, quien medió en el acuerdo para finalizar dicho conflicto, describió el movimiento de protesta como "el resultado de la terrible pobreza". Afirmó que "las demandas de la población rural deben ser escuchadas si nosotros queremos una paz duradera"⁴¹.

Las protestas de Cochabamba estaban dirigidas al Banco Mundial y a la San Francisco/London-based

Bechtel Corporation, el principal poder financiero detrás del conglomerado transnacional que compró el sistema de agua público, en medio de serios cargos de corrupción y donaciones, duplicando entonces las tarifas para muchos usuarios pobres. Bajo las presiones del Banco, Bolivia ha vendido importantes bienes a corporaciones privadas (casi siempre extranjeras). La venta del sistema de agua público y el incremento de los servicios provocó protestas durante meses, que culminaron en la manifestación que paralizó la ciudad gracias a las políticas gubernamentales apoyadas por las recomendaciones del Banco Mundial, según las cuales "no se debía conceder subsidios para aminorar el incremento en las tarifas de agua en Cochabamba", todos los usuarios, incluyendo los muy pobres, debían pagar los costos totales de los servicios. Usando la Internet, activistas en Bolivia convocaron a protestas internacionales, las cuales tuvieron un impacto significativo, probablemente ampliado por las protestas de Washington sobre las políticas del Banco Mundial y del FMI. Bechtel retrocedió y el gobierno rescindió la venta⁴².



Al tiempo que se declaraba la ley marcial en Bolivia, un informe proveniente del sur de Colombia, describía el temor por la noticia del terror generalizado debido a la llegada de los aviones de fumigación para "fumigar veneno en los campos de coca, por cuanto ese hecho causaría la muerte de los cultivos de subsistencia de los campesinos, aparte del desorden social masivo, y aumentaría la constante amenaza de violencia". El persistente temor y cólera reflejan "el nivel de horror y confusión en esta parte de Colombia"⁴³.

Esa situación recuerda el pasado reciente. ¿Exactamente que derecho tiene Estados Unidos de llevar a cabo operaciones militares y guerras químicas y biológicas en otros países para destruir un cultivo que a él lo afecta? Se puede dar la respuesta cinica de que los gobernantes locales solicitan "asistencia", o algo más. Por esta razón, nosotros debemos preguntar si otros países tienen el mismo derecho de extraterritorialidad para violentar y destruir esas demandas de Estados Unidos.

41. AP, NYT, abril 10; Peter McFarren, AP, BG, abril 10; Reuters, AP, abril 18; Richard Lapper, "Anger in the Andes", FT, abril 26; Francis McDonagh, *National Catholic Reporter*, abril 28, 2000.

42. Jim Shultz, *The Democracy Center*, Bogotá abril, 9; *San José Mercury News*, abril 8; *Democracy Center*, abril 13; *Pacific News Service* abril 13; *San Francisco Examiner*, abril 19; In *These Times*, mayo 15, 2000.

43. Kirk Semple, "AntiDrug efforts sowing fear in Colombia", BG, abril 10, 2000.

El número de colombianos que mueren por consumo de droga letal producida por Estados Unidos excede el número de estadounidenses que mueren por consumo de cocaína, y este índice es mucho mayor si lo relacionamos con la población de cada país. En el este y sudeste de Asia, las drogas letales producidas por Estados Unidos ocasionan millones de muertes. Estos países son obligados no solamente a aceptar sus productos sino también a publicitarlos, bajo amenaza de sanciones comerciales. Los efectos de la "comercialización y publicidad agresiva por las firmas estadounidenses son, en buena medida, responsables de un considerable incremento en los índices de mujeres y jóvenes fumadores en esos países asiáticos, en donde las puertas fueron abiertas de manera forzosa mediante amenazas de severas sanciones comerciales de Estados Unidos", concluyeron los investigadores de salud pública⁴⁴.

En contraste, a los carteles colombianos no se les permite desarrollar campañas publicitarias en las que el homólogo de un Joe Camel exalte las maravillas de la cocaína.

Gracias a la creencia de Estados Unidos en el "libre comercio" y la "libertad de palabra", las exportaciones globales de cigarrillos se han expandido rápidamente, incrementándose 5 veces más desde 1975 a 1996⁴⁵. Ésta es una dramática ilustración de alguno de los resultados de los fanáticos de la teología política que elevan el "comercio" al rango más alto de los valores humanos.

Por consiguiente, nosotros tenemos el derecho y la obligación moral de preguntar si Colombia, Tailandia, China y otros blancos de la política comercial de

Estados Unidos y de las promociones agresivas de exportaciones letales tienen derecho a utilizar armas biológicas, químicas y militares en Carolina del Norte. Si no, ¿por qué no? También podríamos preguntar: ¿por qué no hay incursiones tipo fuerza delta contra bancos y corporaciones químicas de Estados Unidos, involucradas con el negocio del narcotráfico?

Podemos preguntar más adelante ¿por qué el pentágono no está listo para atacar a Canadá, país que ahora está desplazando a Colombia y a México como proveedor de marihuana?

La marihuana se ha convertido en el principal producto agrícola de la Colombia Británica y uno de los más importantes sectores de la economía (en Quebec y en Manitoba), con un incremento de diez veces en los últimos años. ¿Por qué no atacar a Estados Unidos, el mayor productor de marihuana, cuya producción sigue expandiéndose rápidamente, con la inclusión de cultivos hidropónicos, si es de lejos el principal centro de producción de drogas ilícitas de alta técnica (ATS, estimulantes tipo anfetaminas), sector del más alto crecimiento en el consumo de las drogas, con 30 millones de consumidores alrededor del mundo, probablemente superando la heroína y la cocaína?

No hay necesidad de revisar en detalle los efectos letales de las drogas de Estados Unidos. La Corte Suprema recientemente concluyó que esto ha sido "ampliamente demostrado". El uso del tabaco, por ejemplo, es "quizás la más simple y más significativa amenaza para la salud pública en Estados Unidos", responsable por más de 400.000 muertes al año, más que las causadas por el sida, accidentes de tránsito, alcohol, homicidios, drogas ilegales, suicidios e incendio combinados. La Corte virtualmente solicitó al Congreso la elaboración de leyes que controlen el consumo del tabaco. Como el uso del tabaco ha disminuido en Estados Unidos y los productores han sido obligados a pagar sustanciales indemnizaciones a sus víctimas, ellos han buscado mercados en el exterior, práctica bastante común. De ahí que el índice de muertos sea incalculable.

Richard Pioto, epidemiólogo de la Universidad de Oxford, estimó que solamente en China 50 millones de personas, incluyendo población menor de 20 años morirán de enfermedades relacionadas con el cigarrillo, índice significativo provocado por la paradigmática doctrina de libre comercio de Estados Unidos⁴⁶.

44. Alvin Winder, Ted Chen y William Mfuko, "Influence of America Tobacco Imports on Smoking Rates Among Women and Youth in Asia", *International Quarterly of Community Health Education* 14 (4) 345-359, 1993-4; Chen y Winder, "APACT: Its Organization and Impact on Resistance to U.S. Tobacco Imperialism", *IBID* 12 (1) 59-67, 1991-1992; véase también capítulo 10. Sobre las audiencias de USTR que forzaron a los países asiáticos a abrir sus puertas a las drogas letales de Estados Unidos y a la publicidad agresiva en el momento en que George Bush anunció la nueva "guerra de las drogas" y la sorprendente reacción de esos dos eventos simultáneos, véase *Detering Democracy*, capítulo 4 "Colombia versus US deaths", véase Peter Bourne, *World Development Forum*, junio 6, 1988, citado por Joyce Miller y Timothy Holtz, "Transnational Corporation and the Health of the Poor" en Kim et al, *op. cit.*

45. Stephen Bezruchka, "Is globalization dangerous to our health?", *Western Journal of Medicine* 172: 332-334, mayo, 2000.

46. Corte Suprema, Linda Greenhouse, Excerpts From Opinions, NYT, marzo 22, 2000. Peto, véase capítulo 10.

En comparación con las 400.000 muertes causadas por el tabaco cada año en Estados Unidos, las muertes relativas al consumo de drogas alcanzaron un récord de 16.000 en 1997. Sin embargo, solamente 1 entre 10 adictos que necesitan tratamiento lo recibe, según el informe de la Casa Blanca⁴⁷. Estos hechos favorecen la aparición de muchas dudas sobre los motivos de la guerra contra las drogas. La razón del interés sobre el uso de las drogas se tornó más evidente cuando la Casa Blanca estaba analizando el Plan Colombia. Ellos rechazaron una enmienda propuesta por la demócrata Nanci Pelosi, quien solicitó fondos que serían destinados a la reducción del consumo por cuanto se conoce que el tratamiento y la prevención son más efectivos que las medidas represivas. Un extenso estudio hecho por Rand Corporation, patrocinado por el Ejército y por la Oficina Nacional de Política de Control de Droga, concluyó que los recursos destinados al tratamiento de drogadictos en Estados Unidos son 23 veces más efectivos que el "control del país productor" (Plan Colombia de Clinton), 11 veces más efectivo que la interdicción y 7 veces más efectivos que la coacción de una ley doméstica⁴⁸.

Sin embargo, esta alternativa viable y efectiva no será tomada en cuenta. Más bien, la "guerra contra la droga se dirige a determinados blancos: campesinos pobres en un país extranjero y personas pobres en casa mediante el uso de la fuerza, sin medidas preventivas para suavizar el problema que supuestamente lo motiva. Mientras el Plan Colombia de Clinton estaba siendo elaborado, funcionarios de alto rango de la administración discutieron una propuesta de la Oficina de Presupuesto y Administración para destinar US\$100 millones de los US\$1,300 millones que serían concedidos a Colombia, con el propósito de utilizarlos para tratamiento de drogadictos. Hubo una oposición casi unánime, particularmente por parte del "Zar anti-drogas", Barry McCaffrey, y la propuesta fue rechazada. Ese rechazo contrasta en muchos aspectos con el gobierno de Richard Nixon, el último presidente liberal, en declarar la guerra contra las drogas en 1971. Dos tercios de los fondos fueron destinados a tratamientos de drogadictos. Se registró un descenso en los arrestos relativos a las drogas y de prisiones federales internas. Sin embargo, desde 1980, "la guerra

contra las drogas ha cambiado. Actualmente, castiga infractores, pero también a la insurgencia en el extranjero y lucha contra la producción de narcóticos en los países productores"⁴⁹.

Una de las consecuencias es un enorme incremento de crímenes relacionados a las drogas y una explosión de la población carcelaria, que alcanza niveles jamás vistos en un país industrializado y posiblemente un récord mundial sin ningún tipo de efecto en lo relativo a la liberación del precio de las drogas.

De las observaciones anteriores, emerge la afirmación de que la guerra de la droga está relacionada con muchas cosas. Es ampliamente reconocido que esas estrategias han fracasado para alcanzar sus finalidades específicas; entre tanto los métodos fracasados son puestos en práctica más vigorosamente, mientras métodos más efectivos para lograr objetivos significativos son rechazados. ¿Hay algún motivo razonable para concluir que la "guerra contra las drogas", implementada de una forma duramente punitiva en los últimos 20 años, y que aparentemente no está fracasando? ¿Cuáles son estos objetivos? Una respuesta plausible está implícita en el comentario del senador Daniel Patrick Moynihan, uno de los senadores más atentos a las estadísticas sociales. Moynihan observó que "nosotros estamos eligiendo un problema de criminalización focalizado en minorías".

El criminólogo Michael Tonry concluye que quienes planearon la guerra conocían exactamente qué estaban haciendo. En primer lugar, ellos se liberan de la "población marginal, población "desechable", como son llamados en Colombia, en donde están siendo eliminados mediante una "limpieza social". En segundo lugar, aterrorizan a toda la población, como una tarea importante, al mismo tiempo que aplican el "ajuste estructural" doméstico impuesto con significativos costos para la mayoría de la población⁵⁰.

49. John Donnelly BG, Febrero, 21, 2000.

50. Tonry, véase capítulo 10. Véase Juan Pablo Ordóñez, *No Human Being is Disposable* Columbia Human Rights Committee, Washington, DC, 1995. Ordóñez es otro activista de derechos humanos que fue obligado a dejar su país por amenazas de muerte. Sobre consecuencias políticas para la población norteamericana, véase Marc y Marqueluisa Miringoff, *The Social Health of the Nation* Oxford 1999, *The latest Index of Social Health*, informe de Fordham Institute, para innovación en política social, la cual controla indicadores sociales (así como lo hacen por agencias gubernamentales en otros países industrializados). La conclusión más evidente es que los indicadores sociales revisados por la GDP aproximadamente hasta mediados del año 1970,

47. John Donnelly, BG, marzo 22, 2000.

48. Dissenting Views of Hon. Nancy Pelosi y Hon. David Obey in House Committee Report 106-521 on H. R. 3908, marzo 14, 2000, distribuido por WOLA.

Mientras la "guerra contra las drogas" sólo ocasionalmente sirve y más frecuentemente degrada la salud y seguridad públicas, una revisión bien informada y crítica concluye: "la guerra contra las drogas regularmente sirve a los intereses privados: intereses expresados por el modelo de vencedores y perdedores, generalmente de acuerdo con los principales intereses de

la política exterior y doméstica de Estados Unidos y con el sector privado que tiene una influencia absoluta sobre la política"⁵¹.

Se pueden discutir los motivos, pero las consecuencias en Estados Unidos y en el resto del mundo parecen razonablemente claras.

han presentado descenso, dejando los niveles de vida de Estados Unidos por debajo de los niveles de 1959, cuando se declaró "recesión social". El cambio coincide con la aparición de la "globalización" oficial y de la versión doméstica de "reformas neoliberales selectivas".

51. Chien et. al., *op. cit.* On the criminal justice system past and present, véase Randall Shelden, *Controlling the Dangerous Classes: A Critical Introduction to the History of Criminal Justice* Allyn and Bacon, 2001.

